

Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo, por sentencia de quince de mayo de dos mil veintiuno, en los antecedentes RUC 1.800.713.062-3, RIT 31-2021, condenó a Luis Felipe Quintanilla Alarcón, como autor del delito de cultivo de especies vegetales del género cannabis, en grado de consumado, sorprendido el 13 de agosto de 2018 en la comuna de Calera de Tango, a la pena de cien días de presidio menor en su grado mínimo, la cual se le tuvo por cumplida con el tiempo que permaneció sujeto a medidas cautelares restrictivas de la libertad personal. Asimismo, se le condenó a la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, a una multa de 40 unidades tributarias mensuales y al comiso de las especies incautadas.

La defensa del acusado dedujo recurso de nulidad contra la indicada sentencia, el que se conoció en la audiencia pública de dieciocho de octubre del presente año, citándose a los intervinientes a la lectura del fallo para el día de hoy, según consta del acta levantada al efecto.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de nulidad se cimenta, de forma principal, en la causal contemplada en el artículo 373, letra a) del Código Procesal Penal, en relación a los artículos 1º, incisos 1º y 4º; 5º, inciso 2º; y, 19 N°s 1, 2, 3, 4, 6 y 12 de la Constitución Política de la República; artículos 18, 19, 26, 27 y 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 15, N° 1 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, los artículos 1, 2, 12 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Expone que, toda la actuación del Ministerio Público al dirigir la investigación criminal fue motivada y fundada por una denuncia anónima. Dicha indagación se

desarrolló a través un criterio subjetivo, prejuicioso, arbitrario y vehemente, sesgado, cual visión de túnel, alejándose de su mandato constitucional y de las propias órdenes generales que vienen a nutrir de contenido y de forma específica, para delitos de tráfico, el criterio objetivo a partir del cual, el Ministerio Público, debe adecuar sus actuaciones, investigando no solo los hechos que inculpen, sino que, con el mismo celo, los que exculpen o aminoren la responsabilidad penal de la persona imputada.

Afirma que lo anterior no ocurrió, ya que la investigación se alejó del criterio objetivo, prejuzgando una situación en virtud de antecedentes insuficientes, sin adecuar su actuación a criterios objetivos, negando cualquier instrucción tendiente a confirmar la denuncia con otras medidas investigativas menos intrusivas o afectadoras de derechos fundamentales. Agrega que, una denuncia anónima —que reconoce como causa legítima para iniciar una investigación— carece del mérito para ejecutar medidas intrusivas, ni para solicitar una orden judicial para su ejecución, debiendo obtenerse una corroboración de la denuncia a través de otros medios probatorios e indagaciones menos intensas o más proporcionales.

A la luz de todo lo expuesto, estima que quedó en evidencia que, tanto los funcionarios policiales, como el propio fiscal a cargo de la investigación, quien los instruyó, incumplieron la normativa interna del Ministerio Público sobre la materia, establecida en el Oficio N° 0936/2017 del Fiscal Nacional.

La defensa considera que, en base a lo expuesto, se configura una detención ilegal por haber sido desproporcionada e inadecuada, afirmando que el Ministerio Público y los funcionarios policiales, cada uno de manera individual, actuó en contravención de la normativa interna del propio Ministerio Público específica en la materia (criterios de actuación en investigaciones sobre delitos sancionados por la Ley 20.000), además de actuar el Fiscal a cargo en



contravención de su norma Orgánica Constitucional y de todo el sistema de garantías constitucionales.

En conclusión, y a pesar de haber tenido fundamento o habilitación legal para afectar la libertad de Luis Quintanilla Alarcón, los funcionarios lo detuvieron en su domicilio, cumpliendo el ordenamiento jurídico pero obrando de forma desproporcionada. La defensa sostiene y critica que, tanto en el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, como en el curso seguido en todo el procedimiento, se actuó en base a una valoración parcial de los hechos, considerando simplemente la presencia de una sustancia controlada, reconociendo de facto, en virtud de la sola valoración empírica o causalista sobre los hechos, que la mera presencia de una determinada cantidad de droga, por el riesgo creado, es de tal magnitud que, independiente de otras valoraciones normativas, se justifica la intervención penal y, por tanto, la aplicación de una sanción punitiva, privativa de libertad en calidad de autor.

Estima que, el agravio producto de una errónea aplicación del derecho, motivada por una visión excesivamente formalista en cuanto al análisis y el procedimiento de razonabilidad aplicado, teniendo por configurado un riesgo de relevancia penal que justifica, en consecuencia, la sanción penal, al considerar solamente la peligrosidad típica de la sustancia, siguiendo un criterio en abstracto, presumiendo de derecho elementos constitutivos del delito, como lo son la antijuridicidad material y la conducta típica, incumpliendo en consecuencia la prohibición constitucional de presumir de derecho la responsabilidad penal, aplicando sanciones a conductas socialmente irrelevantes, vulnerando garantías procesales y sustantivas del debido proceso, quebrantando una aplicación sistematizada del derecho penal, incurriendo en faltas graves al principio de integridad judicial.



Segundo: Que, de forma subsidiaria, la defensa fundó el arbitrio en el motivo de nulidad establecido en el artículo 373, letra b) del Código Procesal Penal. Expone que la errónea aplicación del derecho se manifiesta en que el fallo califica de delito un hecho que la ley no considera tal, aplicando una pena cuando no procedía aplicar pena alguna, agregando que, lo que sanciona el artículo 8° de la Ley 20.000 es la persona que, careciendo de la debida autorización, siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, a menos que justifique que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, situación en la cual se aplicarán las sanciones contenidas en el artículo 50 y siguientes de la Ley 20.000.

Afirma que, el cultivo y cosecha de la especie vegetal cannabis sativa, que es aquello que se le reprocha a su representado, representa una etapa imperfecta o anterior al consumo final —es decir, un acto preparatorio— realizado de forma privada en su domicilio ubicado en la comuna de Calera de Tango, en el contexto de un cultivo colectivo destinado al consumo privado y terapéutico, en este caso, de un grupo cerrado e individualizado de personas, miembros de una organización con personalidad jurídica sin fin de lucro denominada “Corporación Usuarios Medicinales de Cannabis Dispensario Nacional”; quedando descartada la posibilidad de una difusión incontrolada de droga a terceras personas indeterminadas.

Sostiene que el delito analizado es de “peligro hipotético”, y que no se dará su tipicidad en aquellos casos en los que el peligro que caracteriza la acción quede totalmente excluido, porque falta la posibilidad del resultado de peligro. A mayor abundamiento, este examen sobre la real posibilidad de resultado de peligro, resulta más imperioso en el caso que nos convoca, toda vez que, el delito de



cultivo de cannabis sativa en sí, castiga una conducta preparatoria para el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, es decir, la conducta en sí misma no implica una afectación al bien jurídico protegido, la sanción que se le asigna solamente es un adelanto de la barrera de la protección del derecho penal.

De las propias aseveraciones realizadas por el tribunal *a quo*, en el dictamen impugnado, se tiene por acreditada la existencia de una agrupación de personas determinadas y formalizada a través de una personalidad jurídica sin fin de lucro vigente a la fecha de los hechos que motivan la presente causa, denominada como “Corporación Usuarios Medicinales de Cannabis Dispensario Nacional”. Luego, que el mismo acusado reconoce ser el presidente de dicha Asociación, y quién mantiene el cultivo de propiedad de la misma, el cual está destinado a satisfacer el consumo terapéutico de cada uno de los socios, también acorde a las diferentes patologías y cantidades determinadas a dispensar, acorde a las recetas médicas que corresponden a cada uno de estos.

El uso o consumo que se haría del cultivo de cannabis, y el material de la misma especie cosechado, era “próximo en el tiempo”, atendida las circunstancias particulares del caso. Esto es, ponderando el número de personas que integraban la agrupación; el tipo de cultivo mantenido; la necesidad terapéutica de cada uno de estos; y, el lapso de tiempo concreto por el cuál debían mantener sin interrupción dicho consumo. No existió peligro de difusión incontrolada de la especie vegetal cannabis sativa, no pudiendo ser probada dicha circunstancia por el ente persecutor, ni acreditada por el tribunal *a quo*. Todo lo contrario, se dio cuenta de un grupo cerrado de personas, que en el contexto del desarrollo de su actividad principal de cultivar cannabis para el consumo terapéutico propio, tomaron los resguardos necesarios para evitar el peligro de difusión incontrolada y la potencial afectación al bien jurídico salud pública.



Concluye que la conducta del acusado no se puede subsumir a cabalidad en el tipo del delito de cultivo ilegal de especies vegetales, como pretende el tribunal *a quo*.

Tercero: Que, en subsidio de lo anterior, motivó su recurso en la causal contenida en el artículo 374, letra e), en relación con el artículo 342, letra c) del Código Procesal Penal. Señala que un funcionario policial refirió que la presente causa se inició por una denuncia anónima motivada por la constancia de presencia de plantas de cannabis; señala el funcionario policial que, el denunciante no refirió que le constaba que al interior del domicilio del acusado se realizaba el tráfico o microtráfico ilícito de estupefacientes. También, el mismo funcionario relató que no se le instruyó, por parte del Ministerio Público, ninguna otra diligencia investigativa posterior a la denuncia anónima, diferente a la medida intrusiva de concurrir al domicilio de mi representado para solicitar autorización de ingreso voluntario. Por ejemplo, afirma no se le instruyó la medida de seguimiento o vigilancia discreta en contra del imputado y su domicilio.

En síntesis, el fallo impugnado no se pronuncia sobre el debate referido en párrafo anterior, sin perjuicio de ser un punto de prueba levantado por la defensa en el ejercicio de contra examen, dada la importancia que se deriva de dicha discusión, por lo que en virtud de lo expuesto, queda constancia que los sentenciadores no se hicieron cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, menos aún de la evidencia levantada por la defensa.

Por las causales enunciadas es que, en primer lugar pide anular el juicio y la sentencia, se determine el estado en que deba quedar el proceso, y se remitan los autos al tribunal no inhabilitado para que ordene la realización de un nuevo juicio oral; en subsidio, lo acoja por la causal contenida en la letra b), del artículo 373 del Código Procesal Penal, anulando solo la sentencia, y dicte, sin nueva audiencia



pero separadamente, la de reemplazo que se conformare a la Ley; o en subsidio de todo lo anterior, lo acoja por la causal del artículo 374, letra e) en relación al artículo 342, letra c), ambos del Código Procesal Penal, haga lugar a éste y anule el juicio oral, invalide la sentencia dictada en aquel, determinando el estado en que hubiere de quedar el procedimiento, disponiendo, en su caso, la remisión de los antecedentes al tribunal no inhabilitado llamado a conocer del nuevo juicio oral.

Cuarto: Que, la sentencia impugnada, en su motivo noveno, tuvo por acreditado que, *“el día 13 de agosto de 2018, alrededor de las 15:50 horas, personal policial se constituye en el domicilio ubicado en calle Camino Lonquén Norte, condominio Las Fuentes, parcela Nro. 106 Comuna de Calera de Tango, en virtud de orden de entrada y registro e incautación, sorprendiendo al imputado Luis Felipe Quintanilla Alarcón, ya individualizado, quienes mantenía una plantación y cultivo de un total de 190 plantas del Género Cannabis Sativa en proceso de crecimiento. El imputado mantenía, también, cosechados un total de 15 kilos 309 gramos de Marihuana a granel, la cual se encontraba distribuida en diversos contenedores. Todo esto sin contar con la debida autorización”*.

Estos hechos fueron calificados por el tribunal como constitutivos del delito de cultivo de especies vegetales del género cannabis previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley 20.000.

Ahora, en relación a los puntos abordados en las causales del recurso de nulidad, el fallo señaló en su motivo octavo que, *“...si se entiende que el delito que configura el artículo 8 de la Ley 20.000 es de peligro hipotético y por lo tanto requiere al menos que el hecho de la acusación configure una acción competente para producir un peligro para el bien jurídico como elemento material integrante del tipo respectivo de delito. En este caso, en particular, se avizora que el cultivo de especies del género cannabis sativa por el acusado pudo poner en peligro la salud*



pública ya que no puede entenderse que era únicamente para su consumo próximo y personal, por su cantidad —190 matas y cosechadas aprox. 15 kls.—, su estado —en cultivo y a granel— y la infraestructura armada, que excede con creces aquella dedica a un consumo propio e inmediato; todo un invernadero habilitado para el cultivo, instalación de 4 focos halógenos, 4 ventilador, 4 termómetros y un turbo calefactor. Todo aquello, en conjunto, va más allá de aquello necesario para un consumo personal y próximo en el tiempo como se insinuó, por más que se pretenda personal colectivo...”

“...Sin embargo y como ya se adelantó, debe hacerse presente además que las cantidades incautadas exceden con creces las de aquellas mencionadas en lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en rol 4949-15 citado por la Defensa en sus alegatos de apertura y cierre. En efecto, en tal fallo lo incautado se trata de 7 plantas de cannabis sativa y 45 grs. de marihuana seca a granel, frente a 190 plantas de cannabis sativa y más de 15 kls. de marihuana a granel en este caso. Por cierto, la doctrina es conteste que uno de los criterios a considerar, para el consumo próximo en el tiempo, es la cantidad incautada. Siendo una cantidad de mayor entidad, la defensa intenta fundarla en el número de miembros a la fecha de los hechos, esto es alrededor de 50 personas. Sin embargo, la propia prueba de cargo permite descartar dicha hipótesis. La perita Steinberg, señala que considerando el número de miembros y el gramaje de sus recetas, la droga a granel, sin las plantas, alcanzaban para 4.6 meses, lo que a todas luces excede un consumo próximo en el tiempo. Ello se ve agravado porque la perita consideró 50 socios, sin embargo las recetas acompañadas, no sirven para justificar el consumo próximo, ya que algunas son posteriores a los hechos —algunas incluso del año 2020— y otras se prescriben por un tiempo que a la fecha de los hechos estaba vencido. En consecuencia, esa droga podía solo ser consumida en un tiempo aun



superior al sostenido por la profesional. De esta forma se descarta el consumo próximo en el tiempo, como si acontecía en el caso resuelto por la Excma. Corte Suprema, en que las cantidades y personas involucradas eran mucho menores...”

“...Que como se ve, el acusado acepta lisa y llanamente su participación en los hechos, aseverando que era quien cultivaba la cannabis en su domicilio, para la Corporación Dispensario Nacional, para el consumo personal y exclusivo colectivo los socios de tal institución, con fines medicinales corroborado por una prescripción médica obligatoria. No obstante, así como se disiente con la Defensa respecto a que el consumo sea próximo en el tiempo como ya se argumentó, además no se comparte que en este caso se trate de un consumo personal colectivo, en los términos de la causa rol 4949-15 de la Excma. Corte Suprema. En efecto, como principal fundamento de su teoría de caso, la Defensa hace valer el fallo de la Excma. Corte Suprema de fecha cuatro de junio de 2015, en los autos ROL 4949-2015. De su estudio, se puede sostener que principalmente la Excma. Corte, basa su decisión en el sentido y alcance de la expresión “uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo” a que condiciona el artículo 8 de la Ley N° 20.000 la sanción de las conductas de cultivo conforme al artículo 50 del mismo texto. Anterior al fallo, dicha expresión generalmente se entendía al consumo individual, que no abarcaba aquellos casos en que la cannabis estaba destinada al consumo de más de una persona. Sin embargo, la Excma. Corte Suprema, descarta tal conclusión señalando que es posible un consumo personal y exclusivo, realizado por varias personas, situación que se da por las particularidades del caso analizado en ese entonces. Sin embargo, a juicio de la mayoría del Tribunal dichas consideraciones no son aplicables a este caso pues la Excma. Corte Suprema indica como uno de los principales reparos a aquella interpretación que refiere que el uso exclusivo y próximo en el tiempo es aplicable a una sola persona, y no a un



uso y cultivo compartido, que el delito del artículo 8 de la Ley 20.000, no excluye la coautoría ni la participación en un delito, a menos que la naturaleza de este no la permita -lo cual no ocurre en el caso de autos. Por ende, los actos de siembra, plantación, cultivo o cosecha de las plantas realizados por dos o más personas mancomunada o concertadamente, aun cuando no todos ellos ejecuten alguno de esos actos de manera directa o inmediata, no serán sancionados conforme al art. 8º sino según el art. 50, en su caso, si justifican que la droga que obtendrían de esas plantas estaba destinada a su propio consumo. Más adelante agrega: no supone necesariamente que el uso o consumo de la sustancia obtenida de la planta deba ser realizado por un solo individuo, sino nada más que debe efectuarse única y exclusivamente por la o las mismas personas que sembraron, plantaron cultivaron o cosecharon la planta que la produce, excluyéndose entonces su uso o consumo por terceros o extraños ajenos a dichas acciones. Así la Corte en resumen concluye que a partir de los hechos acreditados en aquella oportunidad, se puede sostener que había un grupo de individuos que cultivaban para su consumo exclusivo, invocando para ello, parte de los hechos acreditados, esto es, en síntesis que el consumo de cannabis tenía por objeto un uso 'en un ejercicio colectivo o grupal de carácter ritual en que participa la acusada, en el marco de un proyecto de vida desarrollado al interior de la institución Triagrama del que forma parte, del cual es cofundadora y que es guiado por la acusada junto a otras dos personas que entre sus actividades se consagran de manera mística a la especie vegetal señalada, y que acorde a las convicciones colectivas que mantienen como agrupación, permitirían la evolución del ser humano y por ende de quienes participan en tales prácticas, objetivo al que se tiende mediante el desarrollo espiritual de cada persona y la ampliación de conciencia sobre mayores aspectos de la realidad, cuestión que es precisamente potenciada con el uso de



cannabis, conforme aprendizajes que han ido descubriendo de diversos referentes que usan dichas técnicas en que se sirven de plantas enteógenas o psicoactivas así como otras prácticas dirigidas al mismo objetivo, tales como danzas, ejercicios corporales, meditación, contemplación y silencio’. Sin embargo, el caso de autos difiere de aquel. La doctrina estima que la coautoría exige que las conductas deban enmarcarse en las hipótesis del artículo 15 N° 1 primera parte Código Penal — actos típicos propiamente tales, ejemplo el homicida que entierra el cuchillo—, o segunda parte, que pueden no ser típicos, pero están íntimamente relacionados con aquellos, denominados actos ejecutivos —el individuo que sujeta a la víctima mientras el otro le da la estocada mortal—. Otra parte de la doctrina indica que pueden considerarse coautores aquellos cuyas conductas se enmarcan en el artículo 15 N° 3 Código Penal —que realmente se trata de una forma de participación que la Ley Chilena asimila a la autoría para efectos de pena—. Sin embargo, con una interpretación restrictiva de la autoría, que evita la aplicación desmesurada de la disposición, se exige por algunos autores, que aquellos que prestan medios para la comisión del ilícito previo concierto, lo hagan de una forma que signifique un aporte funcional de importancia, o esencial para el desarrollo de la actividad. Así, haciendo un análisis de los testimonios de los socios de la corporación, no es posible colegir alguna conducta que se enmarque dentro de actos típicos o acciones ejecutivas —artículo 15 N°1 del citado código punitivo—...”

“...La Defensa pretende entonces, con la prueba de exculpación ya analizada, señalar que por el hecho de estar destinada la droga a un consumo cerrado por un grupo de personas en una corporación, no se afecta en definitiva la salud pública. Los jueces de mayoría discrepan de tal afirmación, puesto que los delitos establecidos en la Ley 20.000, lo que pretenden proteger es el bien jurídico salud pública, entendido como la salud física y mental de aquel sector de la



colectividad que puede verse afectado por el efecto nocivo de las sustancias prohibidas (Lecciones de Derecho Penal, parte especial, Matus Ramírez, Politoff, segunda edición página 574). Más adelante, los mismos autores agregan, la medida del peligro para estos bienes jurídicos se encuentra en la posibilidad de difusión incontrolable de sustancias prohibidas, ya que de ese modo tales sustancias son puestas a disposición de los consumidores finales (misma página). Así, considerando la gran cantidad de droga incautada, y que no pudo justificarse que toda ella está destinada a un consumo personal y exclusivo como se viene desarrollando, existe posibilidad de una difusión incontrolada de la cannabis. En el mismo sentido al haberse acreditado falta de autorización del SAG, como exige el artículo 9 de la Ley 20.000, no existe fiscalización alguna respecto de dichos cultivos, incidiendo nuevamente en la posibilidad de difusión incontrolada, poniendo el peligro el bien jurídico. Los cuestionamientos de la defensa en cuanto a que dichas autorizaciones son solamente dadas a empresas o cultivos de carácter industrial, se contraponen al mismo artículo 9 de la Ley 20000, que posibilita la autorización a personas naturales...”.

Quinto: Que, en lo concerniente a la infracción denunciada de manera principal por el recurso de nulidad, cabe indicar que el debido proceso es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República y que consiste en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y al efecto, el artículo 19, N° 3, inciso sexto, confiere al legislador la misión de definir las garantías de un procedimiento racional y justo. Sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Chile que están en vigor y las leyes, les entregan a las partes de la relación



procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas.

Sexto: Que, en otro orden de consideraciones, en cuanto a las facultades autónomas de actuación que la ley le entrega al personal policial, así como lo referido al respeto del debido proceso y la intimidad, esta Corte Suprema ha señalado reiteradamente que la negativa a admitir prueba ilícita tiene como fundamento la concepción del proceso como instrumento de resolución jurisdiccional de litigios dentro del ordenamiento jurídico, lo que conduce a que todo acto que infrinja de manera sustancial dicho sistema debe ser excluido de mismo.

Séptimo: Que a fin de dirimir lo planteado por el recurrente, desde que las circunstancias que motivaron el ingreso al domicilio del imputado fueron materia de prueba y debate en el proceso, es menester estarse a lo asentado por los jueces de la instancia al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, efectúe una nueva valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el tribunal del grado, porque ello quebranta de manera evidente las máximas de oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia, que rigen la incorporación y valoración de la prueba en este sistema procesal penal, ya que implicaría que este tribunal de nulidad diera por acreditados hechos distintos y opuestos a los que los magistrados extrajeron de esos elementos, no obstante que los jueces apreciaron íntegra y directamente su rendición, incluso el examen y contra examen de los contendientes, así como hicieron las consultas necesarias para aclarar sus dudas, y de aceptarse, entonces la tesis del recurrente, simplemente transformaría a esta Corte, en lo atinente a los

hechos en que se construye esta causal de nulidad, en un tribunal de segunda instancia, lo cual, huelga explicar, resulta inaceptable.

Octavo: Que como se ha dicho en ocasiones anteriores por esta Corte, el Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa las funciones de la policía en relación con la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación. Tal regulación, en todo caso, contempla como regla general que su actuación se encuentra sujeta a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o de los jueces (entre otras, SCS N°s 7.178-2017, de 13 de abril de 2017; 9.167-2017, de 27 de abril de 2017; 20.286-2018, de 1 de octubre de 2018; 28.126-2018, de 13 de diciembre de 2018; 13.881-2019, de 25 de julio de 2019; y, 25.389-2021, de 18 de agosto de 2021).

Noveno: Que, en ese orden, conforme al sustrato fáctico establecido por los jueces orales, el fallo tuvo por cierto que los funcionarios policiales luego de haber recibido una denuncia anónima en relación a la plantación de especies vegetales del género cannabis en el domicilio del acusado, concurriendo a dicho lugar y ante la negativa de obtener una autorización voluntaria de entrada y registro, motivó la solicitud al fiscal para obtener judicialmente dicha autorización, ingresando personal policial al lugar encontrando las especies vegetales referidas.

Décimo: Que, en cuanto al reproche formulado por la supuesta inobservancia a las instrucciones generales impartidas por el Fiscal Nacional, en lo relativo al tratamiento que debe otorgarse a las denuncias anónimas en delitos contemplados en la Ley 20.000, cabe precisar que, dentro de las atribuciones asignadas al Fiscal Nacional, contenidas en el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, se encuentra la de dictar instrucciones generales que estime necesarias para el adecuado cumplimiento de las tareas de

dirección de la investigación de los hechos constitutivos de delitos, el ejercicio de la acción penal, y la protección de víctimas y testigos. Los instructivos son precisamente aquellas instrucciones de carácter general que el Fiscal Nacional, como jefe superior del ente persecutor y responsable de su funcionamiento, en uso de sus facultades y atribuciones legales, dicta para el cumplimiento de las finalidades ya expresadas y no pueden entenderse como requisitos adicionales a aquellos establecidos por la Carta Fundamental y por el legislador procesal penal para la validez de los actos del procedimiento.

Undécimo: Que, de ese modo, los policías actuaron conforme a las facultades concedidas por la ley, previa instrucción del fiscal y autorización del juez de garantía y, por consiguiente, los sentenciadores del fondo que valoraron la prueba proveniente de dichas actuaciones no afectaron los derechos referidos en el recurso, motivos por los cuales el primer capítulo de la causal del arbitrio de nulidad impetrado debe ser desestimada.

Duodécimo: Que, en lo que guarda relación con la primera causal propuesta a título subsidiario, su centro argumentativo radica en que el supuesto de haberse calificado como delito un hecho que la ley no califica como tal, dado que no existiría peligro de tráfico de estupefacientes, no afectándose el bien jurídico protegido, por cuanto el cultivo estaría dirigido a suplir de cannabis a los miembros de la asociación que preside el acusado, dado el volumen, el número de asociados y sus necesidades terapéuticas.

Decimotercero: Que, conviene precisar que el hecho que tuvieron por acreditado los sentenciadores del fondo —inamovible para este Tribunal por la causal propuesta— estriba en que el cultivo de especies del género cannabis sativa por parte del acusado, pudo poner en peligro la salud pública ya que no es dable entender que era únicamente para su consumo próximo y personal, por su

cantidad, su estado y la infraestructura armada, que excede con creces aquella para un consumo propio e inmediato; todo un invernadero habilitado para el cultivo, instalación de cuatro focos halógenos, cuatro ventiladores, cuatro termómetros y un turbo calefactor.

Todo aquello, en conjunto, va más allá de aquello necesario para un consumo personal y próximo en el tiempo como se insinuó, por más que se pretenda uno de carácter personal y colectivo. Asimismo, establecieron que las cantidades incautadas excedieron con creces las de aquellas mencionadas en lo resuelto por este Tribunal en el ingreso N° 4.949-2015 —citado por la defensa— en sus alegatos de apertura y cierre. En efecto, en tal fallo lo incautado versó sobre siete plantas de cannabis sativa y 45 gramos de marihuana seca a granel, frente a 190 plantas de cannabis sativa y más de 15 kilos de marihuana a granel en este caso.

Decimocuarto: Que, en base a lo expresado previamente, la conducta en la cual incurrió el imputado es aquella establecida en el artículo 8º, de la Ley 20.000, el cual dispone: *“El que, careciendo de la debida autorización, siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, caso en el cual sólo se aplicarán las sanciones de los artículos 50 y siguientes”*.

En razón de lo anterior es que los sentenciadores del grado al sancionar la conducta como lo hicieron no cometieron en yerro que se denuncia.

Decimoquinto: Que, finalmente, en lo tocante al segundo motivo de nulidad subsidiario explicitado a través de la proposición de la causal de la letra e), del



artículo 374 del Código Procesal Penal, en armonía con el artículo 342, letra c) del mismo cuerpo de leyes, cabe reiterar que ella se refiere a la omisión, en la sentencia, de alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, indicando que ello ocurre en relación a los elementos que la letra c) de esta última disposición ordena observar, esto es: *“La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y la valoración de los medios de prueba que fundamentare dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”*. A su vez, esta última norma prescribe *“Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiese desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia”*.

En relación a esta causal la defensa reprocha una supuesta falta de ponderación y omisión respecto a uno de los testigos de cargo.

Decimosexto: Que, sobre la motivación de una sentencia, como lo ha señalado esta Corte Suprema, se ha resaltado la importancia que todo fallo cumpla con los fundamentos de claridad, congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que deben observar los fallos (Revista de Derecho y Jurisprudencia Tomo XXV, Sección 1ª, 1928, p. 156,). En esto ha resuelto la jurisprudencia

nacional que hay ausencia de fundamento tanto cuando este se encuentra ausente, como cuando la ausencia es parcial o son insuficientes los expresados, al igual que en el evento de existir incoherencia interna, arbitrariedad y falta de razonabilidad; y que la motivación de las sentencias constituye una faceta o cariz de un justo y racional procedimiento como exige nuestra carta fundamental, que debe cumplirse, por ser esta la ocasión en que el Estado, por medio del órgano jurisdiccional, responde al derecho de petición y especialmente a la acción intentada en el proceso, lo cual, sin duda, debe tener en consideración el tribunal superior al revisar eventualmente la decisión (entre otras, SCS N°s 8.314-2009, de 27 de enero de 2011; 8.167-2008, de 21 de diciembre de 2010; y, 3.696-2008, de 21 de diciembre de 2010).

Decimoséptimo: Que, en cuanto al punto abordado por la causal en análisis, cabe advertir que el recurso se construye sobre la base de sostener hechos distintos a los establecidos por la sentencia, puesto que, la propia descripción de los fundamentos de la causal dan cuenta que ella en realidad plantea una discrepancia de las conclusiones extraídas por los jueces del fondo, en su fundamento octavo, que contiene una exposición clara de los hechos que se han dado por probados y los motivos por los cuales se arribó a dichas conclusiones desvirtuándose las argumentaciones de la defensa, dejando en evidencia que el recurso pretende una nueva valoración de la prueba, proceso que está entregado exclusivamente a los jueces de la instancia y sujeto a cautelas procesales que han sido sobradamente respetadas en este caso.

Decimooctavo: Que, es necesario recordar que en un recurso como el de la especie, no ha sido dada a esta Corte la facultad de realizar una nueva ponderación de los elementos de prueba vertidos en el juicio oral, puesto que ello atenta contra el principio de inmediación y supera los límites de la nulidad. Por el



contrario, la argumentación del impugnante se dirige en este sentido, por cuanto cuestiona la prueba producida por el ente persecutor, mediante el análisis de pasajes aislados y las conclusiones que de ella extraen los sentenciadores, sin atacar —como supone la causal de nulidad en examen— el razonamiento del fallo que plasma el análisis global de la prueba rendida, en cuanto éste debe ajustarse a las reglas de la sana crítica, respetando las máximas de la experiencia, los principios de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados.

Decimonoveno: Que entonces, en oposición a lo explicitado en el recurso que se revisa, la sentencia atacada sí permite reconstruir el razonamiento desplegado por los jueces en el establecimiento de los hechos y justifica las opciones fácticas y jurídicas asumidas, aspectos todos que satisfacen sobradamente las prescripciones del legislador procesal en la materia, de manera que al no haber sido acreditadas las hipótesis de infracción a la forma de las sentencias que se han pretendido, y que han sido establecidas como cautela del derecho a una decisión razonada, la impugnación deberá ser desestimada.

Vigésimo: Que, de acuerdo a lo expresado, el recurso en análisis será rechazado.

Por estas consideraciones y de acuerdo también a lo establecido en los artículos 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa del acusado Luis Felipe Quintanilla Alarcón, en contra de la sentencia de quince de mayo de dos mil veintiuno, pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo, en los autos RUC 1.800.713.062-3, RIT 31-2021, declarándose que ésta y el juicio oral que le precedió **no son nulos**.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos.

N° 36.857-2021.





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. Santiago, cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

